



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SAINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión nº 04/05 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, celebrada el día 17 de febrero de 2005, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual, en relación con el expediente **RO 2004/1837** se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DENIEGA A LA ENTIDAD “CARTAGENA DE COMUNICACIONES, S.A.” LA SOLICITUD DE UNA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DE AMBITO NACIONAL

I

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 24 de noviembre de 2004 se recibió en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones escrito de D. Francisco Javier Angelina González, en nombre y representación de la entidad CARTAGENA DE COMUNICACIONES, S.A. (en adelante CDC) mediante el que solicita la inscripción de la citada entidad en el Registro Especial de Operadores de Cable como operador, también, del servicio de televisión por cable.

Segundo.- Consultados los Registros que se llevan en esta Comisión, la citada entidad figura inscrita como persona autorizada para la explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas de ámbito nacional y para la prestación del servicio de transmisión de datos disponibles al público de ámbito nacional. En su calidad de operador inscrito en los citados registros CDC está habilitada



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

para prestar, entre otros, el servicio soporte de los servicios de difusión, así como, determinados servicios de carácter audiovisual, siempre que éstos tengan naturaleza de servicios de comunicaciones electrónicas y no la de servicios de difusión de radio y televisión.

Tercero.- Con fecha 28 de noviembre de 1996 le fue otorgada a CDC una concesión provisional para seguir realizando la actividad de televisión por cable que venía explotando en la localidad de Cartagena (Murcia) con el nombre comercial de “TELE-CARTAGENA”.

La vigencia de la habilitación contenida en la citada concesión provisional finalizó el día 18 de febrero de 2000, fecha en la que se entregó a su titular la notificación por la que se le informaba de la entrada en servicio de la actividad de “Región de Murcia de Cable, S.A. (adjudicatario definitivo del servicio de telecomunicaciones por cable), y se le remitió copia del acta de inspección levantada por la Inspección de Telecomunicaciones el día 17 de diciembre de 1999.

Por medio de la citada acta se acreditaba la entrada en servicio de la red de telecomunicaciones mediante la que se prestaba, entre otros, el servicio de televisión por cable. Con esta notificación se daba cumplimiento a las condiciones a las que se refiere la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para que se extinguiera definitivamente la habilitación que ostentaba TELE-CARTAGENA para prestar el servicio de televisión por cable.

Por la razón anterior, CDC no era titular de título habilitante vigente para prestar el servicio de difusión de televisión por cable en la fecha de entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTel), por lo que no se le pudo aplicar el sistema de transformación automática en la correspondiente autorización administrativa para prestar el servicio de difusión de televisión por cable previsto en la Disposición transitoria décima de la citada Ley.

Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2004, se comunicó a la entidad solicitante que el procedimiento había sido instruido y que, en atención a las consideraciones que se contenían en el informe que se le remitía, se iba a proponer a este Consejo la denegación de la solicitud formulada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se indicaba a la interesada que disponía del plazo de 10 días para que, si lo estimaba conveniente, pudiera efectuar alegaciones y aportar documentos.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Quinto.- Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2005, la entidad interesada presentó escrito de alegaciones sobre el resultado de la instrucción del procedimiento en el que, en síntesis, manifestaba lo siguiente:

1. Que mostraba su conformidad con la instrucción del procedimiento en cuanto a que su solicitud se refería tanto al otorgamiento de título habilitante, como su reconocimiento, para la prestación de servicios de televisión por cable en todo el territorio nacional y su correspondiente inscripción en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones como operador de televisión por cable.
2. La obligatoriedad de acceder a lo solicitado en función de lo establecido en la Disposición adicional décima de la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de noviembre, en razón de la protección de los Poderes Públicos para el ejercicio de los Derechos fundamentales.
3. Que el párrafo tercero de la Disposición transitoria décima de la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de noviembre, no es aplicable por ser contrario a las Directivas Comunitarias que transpone y en cuanto infringe derechos subjetivos.

Fundamenta esta alegación en lo siguiente:

- a. Que el marco regulador de las emisiones y transmisiones televisivas es diferente al marco regulador de los contenidos televisivos.
 - b. Que la Comisión europea estima que la Disposición transitoria décima de la LGT/03 es ilegal en cuanto pospone el otorgamiento de nuevas autorizaciones para la prestación del servicio de televisión por cable hasta el 31 de diciembre de 2009.
 - c. Que la posposición de nuevas autorizaciones hasta el 31 de diciembre del 2009 infringe abiertamente las normas sobre la libre competencia y a la necesidad de poner fin a los derechos especiales y exclusivos.
4. Que la Disposición transitoria décima de la LGT/3, al posponer las nuevas autorizaciones para la televisión por cable hasta el 31 de diciembre del 2009, es inconstitucional por infringir abiertamente el derecho fundamental a una comunicación pública libre establecido en el Artículo 20 de la Constitución española.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Delimitación del objeto de presente procedimiento.

En su escrito de solicitud, la interesada insta expresamente para que esta Comisión le inscriba en el Registro Especial de Operadores de Cable como operador, también, de televisión por cable.

No obstante, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional décima de la LGTel, la inscripción de un operador en el correspondiente Registro de Operadores del servicio de difusión de televisión por cable, requiere necesariamente de la obtención previa de una autorización administrativa que habilite al citado operador para prestar el servicio mencionado.

A este respecto, la Disposición adicional décima de la LGTel establece lo siguiente:

“Los servicios de difusión de radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia, en las condiciones que se establezcan por el Gobierno mediante reglamento. Para su prestación en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma será preceptiva la previa obtención de una autorización administrativa estatal y su inscripción en el registro que a tal efecto se llevará en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Los operadores cuyo ámbito territorial de actuación no exceda del correspondiente al de una comunidad autónoma deberán solicitar la autorización al órgano competente de la misma. Dichas autorizaciones se inscribirán en los registros establecidos al efecto por cada comunidad autónoma. Tales inscripciones deberán comunicarse al registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a efectos meramente informativos.”

El artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), establece que las solicitudes de iniciación de los procedimientos administrativos deberán contener, entre otras circunstancias, los hechos razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

Si bien la petición contenida en el escrito de iniciación presentado por CDC se limita a solicitar la inscripción de la entidad en el Registro Especial de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Operadores de Cable como operador, también, de televisión por cable, del análisis conjunto de los hechos y razones contenidos en el escrito y de la petición que lo finaliza, cabe concretar la solicitud formulada los siguientes términos:

- a) Que se acuerde el otorgamiento a CDC de una autorización administrativa para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable
- b) Que se acuerde la inscripción de la autorización administrativa en el correspondiente Registro.

A este respecto, manifiesta CDC en su escrito de alegaciones de 12 de enero de 2005, que su verdadera intención es la de solicitar, tanto el otorgamiento de título habilitante para la prestación del servicio de televisión por cable en todo el territorio nacional, como su correspondiente inscripción en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones como operador de televisión por cable.

En atención a lo anterior, procede delimitar en objeto del presente procedimiento en la resolución de la siguiente solicitud formulada por CDC:

- c) Que se acuerde el otorgamiento a CDC de una autorización administrativa para la prestación del servicio de difusión de televisión por cable en todo el territorio nacional.
- d) Que se acuerde la inscripción de la citada autorización administrativa en el correspondiente Registro de Operadores al que se refiere el artículo 7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Segundo.- Competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La determinación de la competencia de esta Comisión para resolver sobre la solicitud de autorización administrativa requiere delimitar el ámbito de cobertura del servicio de difusión de televisión por cable para el que se solicita la autorización y correspondiente inscripción en el Registro de operadores.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la solicitante no indicaba cual sería el ámbito de cobertura del servicio, esto es, si el mismo se prestaría en un ámbito territorial de cobertura superior o no al de una comunidad autónoma. No obstante, realizando una lectura conjunta de la argumentación jurídica contenida en el escrito de solicitud y de los antecedentes de hecho del mismo, se concluyó, en principio, que la solicitud se refería a un servicio de ámbito nacional, por lo que esta Comisión resultaría competente para resolver sobre la solicitud formulada. Esta conclusión fue posteriormente refrendada por la propia interesada en su escrito de alegaciones de 12 de enero de 2005.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Tercero.- Sobre la posibilidad de acceder a lo solicitado en aplicación de lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

La disposición transitoria décima de la LGTel establece que

“No obstante lo dispuesto en la disposición adicional décima, no se otorgarán nuevas autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión por cable antes del 31 de diciembre de 2009, salvo que el Gobierno a partir del 31 de diciembre de 2005, previo dictamen razonado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (...) considere conveniente la modificación de dicho término”.

“Vencido el término a que se refiere el párrafo anterior, el otorgamiento de las autorizaciones se realizará conforme a lo que se establezca por reglamento”.

Por tanto, no habiendo transcurrido el plazo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones, hasta 31 de diciembre de 2009, o el 31 de diciembre de 2005, en su caso, no se podrán otorgar nuevas autorizaciones para la prestación del servicio de televisión por cable.

Asimismo, el último párrafo de la citada disposición transitoria recoge una excepción a la citada moratoria al señalar que:

“Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, podrán otorgarse nuevas autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión por cable antes de la fecha mencionada, una vez que haya entrado en vigor el reglamento previsto por la disposición adicional décima, dentro del ámbito de las demarcaciones territoriales constituidas conforme a la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, en las que hubieran quedado desiertos los concursos convocados a su amparo”.

Ninguno de los requisitos establecidos en el párrafo de la Disposición transitoria décima transcrito concurre en el presente caso, esto es:

- a) Todavía no se ha promulgado el reglamento previsto en la Disposición adicional décima de la Ley citada.
- b) La solicitante no se refiere en su solicitud a un ámbito territorial coincidente con una demarcación territorial constituida conforme a la Ley 42/1995, en la que hubiera quedado desierto el concurso convocado a su amparo.

Por otra parte, si la solicitud se refiriera al ámbito territorial de Cartagena (localidad en la que, en su día, prestaba el servicio al amparo de una concesión



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

provisional), tampoco se estaría ante una situación configurada en la disposición transitoria décima de la Ley, ya que no ha quedado desierto el concurso convocado en la demarcación territorial que comprendía la citada localidad.

Por lo que atañe a la inscripción en el Registro de operadores de la citada autorización administrativa, tampoco sería posible acceder a la misma por cuanto que el artículo 7 de la LGTel solo contempla la inscripción en el citado Registro de los datos relativos a las personas físicas o jurídicas que hayan notificado su intención de explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas. A este respecto ha de tenerse en cuenta que la solicitante ya se encuentra inscrita en el citado registro para explotar redes públicas y para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

En virtud de lo anterior, procede desestimar la solicitud formulada por CDC.

Cuarto.- Contestación a las alegaciones contenidas en el escrito de 23 de noviembre, en las que la interesada fundamenta su solicitud.

4.1 Alegación primera.

Por lo que se refiere a la afirmación consistente en que CDC viene prestando servicios de telecomunicaciones por cable a través de la concesión provisional otorgada al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre de Telecomunicaciones por cable, cabe indicar que la habilitación que le concedía la citada concesión provisional dejó de surtir efectos el día 18 de febrero de 2000, fecha en la que se notificó a su titular la entrada en servicio de la actividad de "Región de Murcia de Cable, S.A. (adjudicatario definitivo del servicio de telecomunicaciones por cable), cumpliéndose así las condiciones a las que se refiere la Disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, como ya se explicaba en el antecedente de hecho tercero.

Por lo tanto, CDC no cuenta, desde la citada fecha, con título habilitante suficiente para prestar servicios de telecomunicaciones por cable, en general, ni el servicio de difusión de televisión por cable, en particular y, por ende, no obtuvo la transformación en la correspondiente autorización administrativa para prestar el citado servicio, al amparo de lo establecido en la Disposición transitoria décima de la vigente Ley General de Telecomunicaciones.

4.2 Alegación segunda.

Nada que objetar a la alegación segunda en cuanto a que CDC era titular de una Licencia Individual de tipo C1 y una Autorización General de tipo C. Únicamente significar que, de conformidad con lo establecido en la Disposición



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

transitoria primera (apartado 2.a) de la LGTel, estos títulos quedaron extinguidos desde la entrada en vigor de la citada Ley, quedando CDC habilitada para la explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas y para la prestación de servicio de transmisión de datos disponibles al público por reunir, en ese momento, los requisitos establecidos en el párrafo primero del artículo 6.1 de la misma Ley. A tenor de lo anterior, CDC está habilitada para la explotación de una red pública que puede servir de soporte para prestar el servicio de difusión de televisión por cable de un operador habilitado o para la retransmisión de servicios de difusión prestados por operadores habilitados, o para prestar servicios de naturaleza audiovisual que no sean, a su vez, servicios de difusión de televisión, pero no para prestar su propio servicio de difusión, esto es, para editar sus propios programas o canales de televisión. Más adelante se analiza la diferencia entre servicios de comunicaciones electrónicas de carácter audiovisual y servicios de difusión de televisión.

4.3 Alegación tercera.

Según CDC, la Disposición adicional décima de la LGTel, liberaliza totalmente la prestación de servicios de las telecomunicaciones por cable, al establecer que *“Los servicios de difusión de radio y televisión por cable se prestarán en régimen de libre competencia”*.

Tal afirmación es parcialmente errónea y se presta a confusión y ello se desprende de la propia transcripción del precepto realizada en la solicitud. Los servicios que se liberalizan mediante la Disposición adicional décima son sólo una parte de los servicios que la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable (en adelante Ley 42/1995) denominaba genéricamente “servicios de telecomunicaciones por cable”. Esto es, lo que ahora se liberaliza son los servicios de difusión de radio y televisión por cable que, según la normativa en vigor antes de la promulgación de la Ley 32/2003, seguían siendo, como el resto de los servicios de difusión (excepto el servicio de difusión de televisión por satélite), servicios públicos.

En concreto, los servicios públicos de difusión de televisión por cable se regían, hasta su liberalización por la entrada en vigor de la LGTel, por lo establecido al respecto en la Ley 42/1995, según se preveía en la Disposición derogatoria única de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que dejaba parcialmente vigente la Ley 42/1995 sólo en lo que a los servicios de difusión se refiere.

El resto de los servicios incluidos en la derogada normativa de las telecomunicaciones por cable (Ley 42/1995 y sus normas de desarrollo) fueron totalmente liberalizados por la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones (actualmente derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones).

Ha de tenerse en cuenta que las concesiones administrativas para la prestación indirecta de los servicios públicos de telecomunicaciones por cable otorgadas de conformidad con la Ley 42/1995, fueron transformadas y extinguidas, en aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 11/1998, mediante las correspondientes órdenes ministeriales, en los siguientes títulos habilitantes:

- a) Una licencia individual de tipo B1 habilitante para la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red pública telefónica fija que podía ser utilizada para prestar el servicio soporte del servicio de difusión de televisión por cable.
- b) Una autorización general de tipo C para la prestación de servicios de transmisión de datos disponibles al público (incluidos servicios audiovisuales que no reúnen las características para ser considerados servicios de difusión).
- c) Una autorización provisional para la prestación del servicio de vídeo bajo demanda (servicio audiovisual que no es servicio de difusión de televisión).
- d) Una concesión administrativa habilitante para la prestación de los servicios públicos de difusión en la correspondiente demarcación territorial, que se mantenía vigente en los mismos términos establecidos en la concesión administrativa de servicios de telecomunicaciones de cable transformada.

Con la entrada en vigor de la Ley 32/2003, los títulos habilitantes comprendidos en los apartados a, b, y c, se extinguieron de forma automática, pasando sus titulares a ser considerados como operadores inscritos en el Registro de Operadores como personas habilitadas para realizar las mismas actividades, ahora denominadas de comunicaciones electrónicas.

Por lo que se refiere a las concesiones administrativas habilitantes para la prestación de los servicios públicos de difusión (apartado “d”), fueron transformadas por esta Comisión en las correspondientes autorizaciones administrativas, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición transitoria décima de la LGTel (evidentemente, sólo se transformaron las que en la fecha de la entrada en vigor de la nueva Ley quedaban vigentes).

Precisamente, al amparo de la liberalización de los servicios de telecomunicaciones por cable (excluidos los servicios de difusión por cable) que se produjo con la entrada en vigor de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, CDC obtuvo la habilitación que hoy ostenta



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

para la explotación de una red pública de telecomunicaciones por cable (que incluye el derecho a prestar el servicio de comunicaciones electrónicas de soporte de los servicios de difusión por cable de operadores habilitados y el servicio de comunicaciones electrónicas de retransmisión de la señales de difusión de televisión de otros operadores habilitados) y para la prestación de servicios de transmisión de datos a través de la citada red de cable (incluidos otros servicios audiovisuales que no reúnan las características propias de los servicios de difusión), pero no para la prestación de sus propios servicios de televisión por cable. Así, CDC puede retransmitir o difundir por su propia red de cable, canales de televisión editados por operadores habilitados para prestar el servicio de difusión de televisión, puede prestar servicios audiovisuales interactivos pero no puede editar sus propios canales de difusión de televisión.

Partiendo de la citada afirmación errónea, la solicitante pretende justificar el derecho a obtener la autorización que solicita fundamentándose en que esta liberalización del servicio de difusión de televisión por cable se ha realizado de forma aparentemente coherente con las nuevas Directivas europeas y, más en concreto, con la Directiva 2002/20/CE del Parlamento y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (en adelante, Directiva de Autorización).

Así, argumentando que la citada Directiva tiene por objeto crear un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas sin exigir una decisión o un acto administrativo expreso de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a la mera notificación (autorización general), pretende incluir, de forma sofisticada, a los servicios de difusión de televisión por cable dentro del concepto de servicios de comunicaciones electrónicas y, por ende, que se les aplique el mismo régimen de autorización general establecido para éstos.

En apoyo de tal argumentación cita, aunque de forma parcial, el Considerando 20 de la Directiva de Autorización en el que, según CDC, se *“pone de manifiesto que una misma empresa, como operador de cable, puede ofrecer, entre otros servicios de contenido televisivo, además del transporte de señales televisivas”*, pero omite indicar que el propio Considerando reconoce que los servicios de contenido televisivo están expresamente excluidos (no contemplados) de la citada Directiva. El Considerando en cuestión dice lo siguiente:

“Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable, puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios no contemplados en la presente Directiva, como la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en relación con su actividad como



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

proveedor o distribuidor de contenidos, con arreglo a disposiciones distintas a las de la presente Directiva, sin perjuicio de la lista de condiciones establecida en el anexo de la presente Directiva.” (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto es erróneo concluir que los servicios de difusión de televisión (transmitidos por cable o por cualquier otro medio) están regulados por las previsiones establecidas en la Directiva de Autorización y, por lo tanto, por las normativas nacionales de transposición de la misma.

La alusión a los servicios de difusión realizada en el citado Considerando tiene como objeto servir de instrumento de interpretación a lo establecido en el artículo 6.1 y en el Anexo de la Directiva, donde se limita el catálogo de condiciones a las que puede ser sometida la autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

Esto es, aplicándolo al caso que nos ocupa, un operador de cable es un suministrador de una red pública fija de comunicaciones electrónicas y, en su caso, un operador de servicios de comunicaciones electrónicas prestados a través de dicha red (por ejemplo, el servicio soporte del servicio de difusión por cable) y, como tal, sólo debe estar sujeto a las condiciones establecidas por la norma que regula la autorización general de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Pero además, puede prestar otro tipo de servicios que no tienen la consideración de comunicaciones electrónicas, como son los servicios de difusión de radio y televisión por cable (que consiste en la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva), en este caso, la prestación de este otro tipo de servicios deberá atenerse a las condiciones específicas que se establezca por la normativa que los regule.

En relación con lo anterior, ha de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (en adelante Directiva Marco), donde se delimita el ámbito de aplicación y objetivo de la citada Directiva y de las directivas específicas (entre las que se encuentra la Directiva de Autorización). El apartado 3 de este artículo establece que ni la presente Directiva ni las directivas específicas afectarán a las medidas adoptadas a escala comunitaria o nacional en cumplimiento del Derecho comunitario, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular, en lo que respecta a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual (de conformidad con esta previsión se ha redactado el artículo 1 de la vigente LGTel anteriormente comentado).

En este sentido se expresan las definiciones de los conceptos de red de comunicaciones electrónicas y servicio de comunicaciones electrónicas



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

contenidas en el artículo 2 de la Directiva Marco. Por eso se excluyen de los citados conceptos el tipo de información transportada por las redes, en un caso, y los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y mediante servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos.

En coherencia con lo establecido en las Directivas Marco y de Autorización, el artículo 1 de la LGTel excluye de su ámbito de aplicación el régimen aplicable a los contenidos de carácter audiovisual transmitidos a través de la redes. Por esa razón, la liberalización de los servicios de difusión de radio y televisión se efectúa en una Disposición adicional (décima) de la Ley y no dentro del articulado de la misma.

Por todo ello, no es posible obtener la habilitación para prestar servicios de difusión de televisión por cable a través de la autorización general prevista en la Directiva de Autorización y en el artículo 6 de la vigente Ley General de Telecomunicaciones. La autorización general habilita, en su caso, para la explotación de una red pública de comunicaciones electrónica utilizada como soporte para la prestación de servicios de difusión de televisión por cable, y para la prestación del servicio de comunicaciones electrónicas de transmisión o difusión de señales de difusión de televisión o para prestar servicios de comunicaciones electrónicas de carácter audiovisual, pero no para el servicio de difusión de televisión, para el que se necesita de la previa obtención de la correspondiente autorización administrativa, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional décima y la Disposición transitoria décima de la citada Ley y la normativa que las desarrolle.

4.4 Alegación cuarta.

La alegación cuarta se limita a manifestar que lo dispuesto en la Disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, que *“no se otorgarán nuevas autorizaciones para la prestación de los servicios de difusión por cable antes del 31 de diciembre de 2009”* viola lo establecido en el Derecho comunitario y en concreto la Directiva 2002/77/CE, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (en adelante Directiva de Competencia) y la Directiva de Autorización. El desarrollo de tal manifestación lo efectúa en las alegaciones quinta y sexta.

4.5 Alegación quinta.

CDC manifiesta que la Disposición transitoria décima conculca lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva de Autorización. El citado artículo regula las autorizaciones generales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Como se ha razonado en el apartado 4.3



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

anterior, los servicios de difusión por cable no son servicios de comunicaciones electrónicas y, por tanto, es erróneo concluir que los servicios de difusión de televisión (transmitidos por cable o por cualquier otro medio) están contemplados en las previsiones establecidas en la Directiva de Autorización y, consecuentemente, por las normativas nacionales de transposición de la misma, por lo tanto, la Disposición Transitoria décima de la Ley 32/2003 no puede conculcar las previsiones de la citada Directiva.

4.6 Alegación sexta.

Al objeto de justificar su alegación consistente en que la Disposición transitoria décima de la LGTel conculca la Directiva de Competencia, CDC cita determinados considerandos y artículos de la citada Directiva, relacionándolos con el servicio de televisión por cable, pero partiendo de la misma interpretación errónea padecida a lo largo de toda su argumentación, esto es, que el servicio de difusión de televisión por cable es un servicio de comunicaciones electrónicas.

En el apartado a) se refiere al Considerando 7 de la Directiva en el que se dice expresamente que *“la transmisión y radiodifusión de programas de radio y de televisión deben considerarse un servicio de comunicación electrónica”*. Efectivamente, estos servicios de transmisión de señales de difusión de televisión o de difusión de radio por medio de redes fijas o de transmisión de las mismas a través de la radiodifusión por medio de redes radioeléctricas, son servicios de comunicaciones electrónicas, pero no lo son los servicios de difusión de televisión o radiodifusión sonora transmitidos por las citadas redes, como es el caso del servicio regulado por la Disposición transitoria décima de la LGTel.

En este sentido se viene repetidamente pronunciando esta Comisión con motivo de diferentes notificaciones de operadores que pretenden explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas que serán utilizadas para servir de soporte a servicios de difusión de televisión y para prestar otros servicios de contenido audiovisual. En las resoluciones de inscripción de estos operadores venimos indicando lo siguiente:

“En primer lugar, analizaremos el concepto de servicio de difusión de televisión por cable, delimitándolo de tal forma que permita su separación de lo que constituye la mera transmisión de señales de televisión por medio de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Al no haberse aprobado todavía la normativa específica que ha de regular los servicios de radio y de televisión por cable a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley General de Telecomunicaciones, el concepto jurídico de televisión no cuenta, actualmente, con una única



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

definición que comprenda a todas las diferentes modalidades de servicios de televisión que se están prestando actualmente.

La única definición aplicable a todos los modelos de televisión que se prestan actualmente, es la contenida en el artículo 25 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, vigente únicamente en materia de radiodifusión y televisión:

“Los servicios de difusión son servicios de telecomunicación en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente.”

“Se entiende por televisión la forma de telecomunicación que permite la emisión o transmisión de imágenes no permanentes, por medio de ondas electromagnéticas propagadas por cable, por satélite, por el espacio sin guía artificial o por cualquier otro medio.”

No obstante, las normas específicas que regulan las diferentes modalidades del servicio de televisión contienen definiciones jurídicas del servicio que tienen en común algunas características que pueden servir para diferenciar el servicio de difusión de televisión de otros servicios que, sin ser servicios de televisión, cumplen con los requisitos técnicos definidores establecidos en el citado artículo 25 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.

No es objeto de esta Resolución hacer una enumeración exhaustiva de toda la normativa específica en este sector, pero si puede resultar esclarecedor la definición de los "servicios de difusión de televisión por cable" que se establece en el artículo 42.a) del Real Decreto 2.066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, recogiendo una definición más explícita de los servicios de difusión. Concretamente se precisa que son aquellos servicios "que consisten en la difusión mediante redes de cable de imágenes no permanentes con su sonido asociado, transmitidas en un solo sentido, codificadas o no, que constituyen una programación prefijada dirigida de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de interactuar sobre el servicio.”

Una vez analizado el servicio de difusión de televisión, procede diferenciar este servicio del establecimiento y explotación de infraestructuras de red que se utilicen como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisión, auténticas redes de comunicaciones electrónicas que se enmarcan dentro de la vigente Ley General de Telecomunicaciones.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En consideración a lo expuesto, debemos partir de la delimitación del concepto de servicio de difusión, lo que nos permitirá diferenciarlo de los anteriormente mencionados. Acudimos para ello a la explicación recogida en la resolución de esta Comisión de 24 de mayo de 2001, en la que se señala que “.....Se puede concluir que son dos los elementos que caracterizan a los servicios de difusión de radio y televisión y que los distingue de los otros servicios que hemos calificado genéricamente como audiovisuales:

- a) que las imágenes y sonidos que se difundan constituyan una programación prefijada por el difusor [tanto en relación con el contenido como con el horario de emisión] y*
- b) que los servicios se dirijan de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de interactuar sobre el servicio.*

En consecuencia, teniendo en cuenta esto último, ha de afirmarse que toda actividad audiovisual a la que no puedan atribuirse las anteriores condiciones, debe entenderse que ha de quedar cubierta por un título de los previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Siguiendo la mencionada resolución debe señalarse que, la elaboración y puesta a disposición del público de una programación propia de un servicio de difusión, es decir, compuesta por unos contenidos prefijados por el responsable de la programación y puesta a disposición a una hora prefijada por el mismo responsable, requiere, en aplicación de la disposición adicional 10ª de la Ley General de Telecomunicaciones, una autorización administrativa de televisión.

Se puede, por tanto, deslindar la naturaleza de los servicios de difusión de televisión de los consistentes en la explotación de redes de comunicaciones electrónicas como infraestructuras que se utilicen como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisión, en las que únicamente el operador encamina la señal del responsable de la programación, cuya prestación puede ser habilitada gracias a la notificación fehaciente a esta Comisión de la intención de realizar la “explotación de una red pública de comunicaciones electrónicas como red soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisión”.

La Directiva de Competencia se refiere, como la de Autorización, a las redes y servicios de comunicaciones electrónica y no afecta a los servicios de difusión sonora o de televisión, por lo que la tan citada Disposición transitoria décima no puede conculcar la citada Directiva.

4.7 Alegación séptima.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El hecho de que la Comisión europea haya decidido enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento en razón de que la Disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, pudiera no ser compatible con las Directivas de Autorización y de Competencia, no demuestra en absoluto que CDC tenga razón en sus alegaciones. Ello porque, además de los razonamientos indicados anteriormente, la carta de emplazamiento ni supone el inicio de un procedimiento de infracción contra un Estado Miembro ni tan siquiera un pronunciamiento (dictamen motivado) sobre la presunción de ilegalidad de la disposición transitoria en relación al derecho comunitario.

4.8 Alegación octava.

En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad de la Disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, cabe significar que esta Comisión no resulta competente para la declaración de tal inconstitucionalidad ni para plantear recurso ni cuestión de inconstitucionalidad contra la citada Disposición adicional (Vid. Artículos 161 a 1263 de la Constitución Española). Por otra parte, no existe constancia de que se hayan planteado recurso o cuestión de inconstitucionalidad contra la misma por las personas físicas o jurídicas habilitadas para ello ni que se haya decidido por el Tribunal Constitucional la suspensión de la aplicación de la Disposición transitoria de continua referencia. Esta Comisión, en cuanto a su condición de Administración pública y conforme al principio de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, debe aplicar en su integridad las normas vigentes en cada momento, por lo tanto, mientras que la citada Disposición adicional no sea suspendida, modificada o anulada, en su caso, por quién ostente la competencia para ello, por ser declarada inconstitucional o por cualquier otra razón, no puede dejar de aplicarla en los términos actualmente vigentes.

Quinto.- Contestación a las alegaciones contenidas en el escrito de alegaciones de 12 de enero de 2005.

El contenido de algunas de estas alegaciones viene a coincidir o a sustentarse en los mismos, o en similares, razonamientos ya expresados en las alegaciones que fundamentaba el escrito de solicitud. Estos razonamientos ya han sido contestados en el fundamento de derecho anterior de la presente Resolución, por que el presente fundamento se limita a dar contestación a las alegaciones contenidas en el escrito de 12 de enero, en la medida en que las mismas contemplen aspectos que no han sido tratados con anterioridad.

- 1. Sobre la obligatoriedad de acceder a lo solicitado en función de lo establecido en la Disposición adicional décima de la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de noviembre, en razón de la**



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

protección de los Poderes Públicos para el ejercicio de los Derechos fundamentales.

Según esta alegación, CDC pretende que esta Comisión le reconozca su derecho preexistente e incondicionado a obtener la autorización administrativa para prestar el servicio de difusión de televisión por cable, a través de la aplicación directa de la Disposición adicional décima de la LGTel, sin tener en cuenta lo establecido en la Disposición transitoria décima de la misma Ley que establece normas transitorias para el otorgamiento de este tipo de autorizaciones administrativas, sobre la base de la aplicación de una doctrina del Tribunal Constitucional que, CDC considera aplicable al caso que nos ocupa.

En defensa de su argumentación, cita las Sentencias del Tribunal Constitucional números 12/1982, de 31 de marzo y 31/1994, de 31 de marzo (repetidamente invocadas a lo largo de los últimos años en el ámbito de la regulación de la televisión por cable en España) relativas a la protección del ejercicio del derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamiento, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, en general, y a la protección del mismo derecho frente a la privación del ejercicio del mismo por los ciudadanos por causa de la inactividad de la Administración para regular los servicios de difusión de televisión por cable.

Así, amparándose en afirmaciones contenidas en las citadas Sentencias como las siguientes: *“Pero lo que no puede el legislador es diferir sine día, mas allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora, la regulación de una actividad, como es en este caso la gestión indirecta de la televisión local por cable, que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental como lo son los reconocidos en el art. 20.1, a) y d) CE...”* (Sentencia 31/1994). *“pues la ausencia de regulación legal comporta, de hecho, como ha ocurrido en los supuestos que han dado lugar a los presentes recursos de amparo, no una regulación limitativa del derecho fundamental, sino la prohibición lisa y llana de aquella actividad que en el ejercicio de la libertad de comunicación que garantizan los apartados a) y d) del art. 20.1 CE, en su manifestación de emisiones televisivas de carácter local y por cable... Por ello, sin negar la conveniencia de una legislación ordenadora del medio, en tanto ésta no se produzca,. No cabe, porque subsista la laguna legal, sujetar a concesión o autorización administrativa –de imposible consecución, por demás- el ejercicio de la actividad de emisión de televisión local por cable, pues ello implica el desconocimiento total o supresión del derecho fundamental a la libertad de expresión y de comunicación que garantiza el art. 20.1. a) y d) XCE”* (Sentencia 31/1994), pretende extrapolar la situación de regulación en aquél momento (año 1994), al momento regulatorio actual del servicio de difusión de televisión por cable.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Con lo anterior CDC concluye que “al no estar regulada las condiciones de ejercicio de esta actividad desde hace más de un año, la CMT tiene la obligación de reconocer el derecho fundamental de mi representada a operar libremente como operador de televisión por cable y por consiguiente a inscribirla en el Registro de Operadores de Cable como operador de televisión por cable, ya que de otro modo le está conculcando este derecho fundamental, al no existir regulación del mismo y suponer ello una prohibición total del ejercicio de este derecho. Por ello es un deber jurídico de esa CMT proteger el derecho fundamental de mi representada a ejercicio la actividad de operador de televisión por cable, ya que la protección de tal derecho fundamental obliga a todos los Poderes Públicos...”

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que en aquel período de tiempo (en el que se dictaron las Sentencias traídas a colación por CDC), estaba vigente la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones en la que se calificaba a los servicios de difusión de televisión como servicios públicos de telecomunicaciones pero que se remitía, en cuanto a su régimen jurídico, a su legislación específica y que, hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable, el servicio de difusión de televisión por cable careció de regulación específica que permitiera su prestación.

No es necesaria una argumentación extensiva para llegar a la conclusión que la actual situación regulatoria, con respecto al servicio de difusión de televisión por cable, es diametralmente distinta a la que operaba cuando fueron dictadas las citadas Sentencias por el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, no es aplicable al caso la citada doctrina constitucional.

En efecto, desde el año 1995, el servicio de difusión por televisión por cable ha contado con sucesivas normas que han venido regulado su prestación por los operadores y, como consecuencia del citado régimen jurídico, en la actualidad existen aproximadamente 510 autorizaciones administrativas y 350 operadores que prestan el servicio de televisión por cable a través de, prácticamente, todo el territorio nacional. La regulación actual del servicio permite que los operadores presentes en el mercado continúen con la prestación del servicio en las condiciones que lo venían haciendo, de forma transitoria, hasta que se promulgue el Reglamento al que hace referencia la Disposición adicional décima de la LGTel e el que se establecerán las obligaciones de los titulares de las autorizaciones. Por lo tanto, es notoriamente incierto que estemos ante una situación de facto de ausencia de regulación, que es la premisa en la que se fundamenta la “doctrina constitucional” citada por CDC.

2. Sobre la alegación consistente en que el párrafo tercero de la Disposición transitoria décima de la Ley General de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de noviembre, no es aplicable por ser contrario a las Directivas Comunitarias que transpone y en cuanto infringe derechos subjetivos.

a. Marco regulador de las emisiones y transmisiones televisivas y su diferenciación con el marco regulador de los contenidos televisivos.

Según esta alegación, la interesada considera que el marco regulador de la televisión por cable no tiene nada que ver con el marco regulador de los contenidos, sino con el marco normativo que regula las actividades de emisión y transmisión (en otros párrafos habla de transmisión y radiodifusión) de los canales de televisión.

Bajo el argumento de que el marco regulador compuesto por la Directivas que se incluyen en el llamado “paquete telecom” regula, no solo las redes de comunicaciones electrónicas, sino, también los servicios de comunicaciones electrónicas, considera que la televisión por cable está dentro del marco regulador de las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, 2002/22/CE y 97/66/CE que regulan las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Esto es, CDC considera que el servicio de televisión por cable consiste en la actividad de transmitir y/o radiodifundir canales de televisión y, por lo tanto, está sujeta al régimen legal de los servicios de comunicaciones electrónicas. Esta afirmación es totalmente errónea y ello por los motivos que se han explicado extensamente en el apartado 4.6, anterior al que nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias. No obstante, conviene insistir aquí en que un operador del servicio de televisión por cable es aquel que edita canales (programaciones) de televisión para ser difundidos a través de una red de televisión por cable que puede ser propia o ajena. Asimismo, el servicio consistente en transmitir o difundir los canales editados puede ser realizado por el propio operador del servicio de difusión de televisión o por un operador que esté habilitado para prestar el servicio de comunicaciones electrónicas soporte del servicio de difusión de televisión, como es el caso de la propia CDC.

b. La Comisión europea estima que la disposición transitoria décima de la LGT/03 es ilegal en cuanto pospone el otorgamiento de nuevas autorizaciones para la prestación del servicio de televisión por cable hasta el 31 de diciembre de 2009.

En relación con esta alegación debemos reiterarnos en que el hecho de que la Comisión europea haya decidido enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento en razón de que la Disposición transitoria décima de la Ley 32/2003, pudiera no ser compatible con las Directivas de Autorización y de



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Competencia, no demuestra en absoluto que CDC tenga razón en sus alegaciones. Ello porque, además de los razonamientos indicados anteriormente, la carta de emplazamiento ni supone el inicio de un procedimiento de infracción contra un Estado Miembro ni tan siquiera un pronunciamiento (dictamen motivado) sobre la presunción de ilegalidad de la disposición transitoria en relación al derecho comunitario. De hecho, el Gobierno no ha iniciado los trámites para modificar la citada Disposición adicional al objeto de considerar que el servicio de difusión de televisión por cable sea un servicio de comunicaciones electrónicas, lo que se está planteando por el Gobierno es su modificación a los solos efectos de eliminar el período transitorio establecido para el otorgamiento de nuevas autorizaciones.

c. La posposición de nuevas autorizaciones hasta el 31 de diciembre del 2009 infringe abiertamente las normas sobre la libre competencia y la necesidad de poner fin a los derechos especiales y exclusivos.

Como las anteriores, esta alegación se fundamenta en la consideración errónea del servicio de difusión de televisión como un servicio de comunicaciones electrónicas, por lo que ha de ser desestimada sin más trámites.

Lo anterior es sin perjuicio de que esta Comisión podría considerar, en su caso, y por otros motivos distintos a los alegados y que sí resulten aplicables, la conveniencia de eliminar el período de posposición de la liberalización total del servicio establecido en la Disposición transitoria de continua referencia, como parece ser el caso del Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la Liberalización de la Televisión por Cable y Fomento del Pluralismo que, al parecer, se está elaborando por el Gobierno.

3. Sobre la alegación consistente en que la Disposición transitoria décima de la LGT/03 al posponer las nuevas autorizaciones para la televisión por cable hasta el 31 de diciembre del 2009 es inconstitucional por infringir abiertamente el derecho fundamental a una comunicación pública libre establecido en el Artículo 20 de la Constitución española.

En relación con esta alegación, nos remitimos a lo manifestado en el punto 4.8 del fundamento de derecho anterior y en el punto 1 del presente fundamento de derecho.

Por cuanto antecede, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 1, apartado dos, 2.b) de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones,



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

y de acuerdo con la Disposición transitoria octava de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,

RESUELVE

Único.- Denegar la solicitud presentada por Cartagena De Comunicaciones de una autorización para la prestación del servicio de televisión por cable de ámbito nacional y su inscripción en el Registro de Operadores de Telecomunicaciones al que se refiere el artículo 7 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, como operador del servicio de difusión de televisión por cable.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO,

Vº. Bº. DEL PRESIDENTE,

Alfonso Ramos de Molins
Sainz de Baranda

Carlos Bustelo García del Real.